

El socialismo requiere la solidaridad y esta no se construye apelando al egoísmo

Camila Piñeiro Harnecker

Creo que antes de discutir distintas maneras de reorganizar nuestra economía, tenemos que estar bien claros de cuál es el objetivo que perseguimos. Para poder valorar qué camino es más acertado, tenemos que saber a dónde queremos llegar. Se dice que el objetivo es salvar o profundizar «nuestro socialismo», pero hay distintas interpretaciones de lo que este significa, sobre todo porque nuestras consideraciones han sido acerca de la forma y hemos olvidado el contenido. ¿Lo que nos preocupa es solo aumentar la productividad y la eficiencia, o que cada cubano tenga una vida plena en todos los sentidos?

Pienso que tenemos que retomar la esencia humanista del proyecto socialista. Desde esa visión, no se trata solo de satisfacer las necesidades materiales de nuestra población porque, como seres humanos, tenemos también la necesidad de sentirnos plenamente realizados, libres de poder desarrollarnos como individuos y miembros de una sociedad. Puesto que el desarrollo pleno de una persona (también conocido como «desarrollo humano integral») lógicamente incluye la satisfacción de sus necesidades materiales—no solo de subsistencia sino todas aquellas que esa persona requiera—, hacer de lo primero el objetivo principal de la sociedad que queremos construir no significa sacrificar lo último. Pero como el desarrollo pleno de una persona no se limita a tener satisfechas sus necesidades materiales, si hacemos de lo último nuestro objetivo sacrificamos lo primero en alguna medida.

Estudiosos de la democracia parti-cipativa han demostrado que solo mediante las experiencias prácticas genuinamente democráticas podemos desarrollar nuestras capacidades intelectuales, morales y humanas de todo tipo. Participar en la toma de decisiones en un ambiente de igualdad hace que nos sintamos seguros de nosotros mismos y que podamos romper con las barreras psicológicas que nos impiden desarrollarnos individual y colectivamente.

Por tanto, si partimos de que el objetivo que perseguimos es que cada cubano se sienta verdaderamente libre y aprenda a diferenciar esto de la «libertad» que pregona el capitalismo: la de consumir sin importar sus consecuencias para otros ni para la naturaleza, no queda duda de que la participación de los trabajadores en la administración o «autogestión» de las empresas, de las instituciones de gobierno y de cualquier otra esfera importante, debe ser un elemento constitutivo de la sociedad que queremos construir.

Además, si reconocemos que no es posible agregar mecánicamente las necesidades individuales de desarrollo pleno en una suma que represente los intereses de todos, porque siempre habrá intereses contrapuestos, nos damos cuenta de que es necesario coordinarlos de forma democrática para así poder definir intereses sociales que se correspondan con los de todos. Ello debe ser también un elemento constitutivo de la sociedad que construyamos. Una sociedad donde la distribución de recursos siga las leyes del mercado (aun bajo las condiciones irrealizables de competencia e información perfecta), es una donde las oportunidades de desarrollo de unos van a ser, inevitablemente, el resultado de limitaciones en el de otros. Y lo mismo ocurre en una sociedad donde la distribución de recursos sea decidida de forma no democrática por una agencia de planificación central, aun si los planificadores y los administradores de

las empresas tuvieran las mejores intenciones al decidir e implementar el plan, pues para que este represente los intereses de todos, tiene que ser democráticamente decidido. Pero, ¿es posible lograrlo? En otras palabras, ¿hay una alternativa al mercado y la planificación no democrática o «centralizada»? Pat Devine y Robin Hahnel (junto con Michael Albert) han demostrado que mediante mecanismos de toma de decisiones genuinamente democráticos bien diferentes se podría lograr que las personas adapten sus intereses individuales de manera que se logre un acuerdo que represente los de todos, y refleje el criterio de eficiencia social (que además de usar los recursos racionalmente, como plantea el concepto de eficiencia tradicional, tiene en cuenta valores sociales como la equidad) decidido por la sociedad. Hahnel formula un procedimiento que él llama «planificación participativa», en el que los productores y consumidores, organizados en consejos y federaciones, proponen y revisan sus propias metas de producción y cuotas de consumo en un proceso reiterativo facilitado por una agencia que calcule los precios indicativos hasta llegar a un plan donde los compromisos de producción de las empresas cubran todas las necesidades de consumo. Con el nombre de «coordinación democrática», Devine propone que las prioridades generales sociales y cambios en las direcciones estratégicas sean decididos a través de un proceso político democrático donde asambleas representativas a todos los niveles escojan entre opciones de planes alternativos (que indican la asignación de recursos productivos y la distribución de poder de compra más generales, así como la distribución sectorial y regional de las inversiones) preparadas por una comisión de planificación nacional, y que el proceso de planificación continúe después hacia abajo a través de las comisiones de planificación elegidas democráticamente en cada región y sector económico.

La distribución de recursos mediante una planificación centralizada crea muchas ineficiencias (desde el punto de vista la racionalidad en el uso de los recursos) precisamente por su carácter no participativo. El plan es impuesto sobre los administradores de las empresas, y por tanto, no es compartido por ellos necesariamente. En cualquier caso, los administradores están motivados a indicarle a los planificadores que las capacidades de producción de sus empresas son menores de lo que son realmente, porque no quieren incumplir con el plan, ya que esto resulta en sanciones como la separación del cargo o reprimendas morales y/o porque sobrecumplir el plan puede significar en bonificaciones o aprecio. Es decir, los administradores de las empresas no están motivados a aumentar la producción, y menos su calidad y eficiencia, todo lo que sería realmente posible. Como solo los administradores —y más aún los trabajadores— saben realmente las potencialidades de la empresa, no hay nada que los planificadores puedan hacer para obtener esa información. Es posible establecer un sistema de control que sancione a las empresas que reportan por debajo de sus capacidades. Pero esto, además de que sería muy costoso y podría también afectar injustamente a los trabajadores, no es realmente efectivo porque no resuelve el problema de la falta de motivación de los administradores.

Aunque es cierto que las relaciones mercantiles estimulan la producción de las empresas, su eficiencia no es más que un mito. Supuestamente, los mercados son eficientes porque son capaces de establecer los precios que mejor representan la disposición de recursos (concretada en la «oferta») y la capacidad de consumo de una sociedad (conocida como la «demanda»). Como las decisiones en un mercado están descentralizadas, o sea, son tomadas por las empresas y los consumidores, en lugar de por una agencia de planificación central, la información que se tiene en cuenta para distribuir los recursos es mucho más confiable que en un sistema centralizado. Pero, aunque los teóricos dicen que la demanda y la oferta se adaptan la una a la otra para

determinar los precios, en realidad lo más común es que los consumidores sean los que se adapten tanto a lo que produzcan las empresas como a los precios que ellas impongan. Además, la oferta incluye elementos que no deberían producirse desde consideraciones éticas, de salud o medioambientales; a la misma vez que ignora otros «públicos» que no pueden ser consumidos de forma individual, tan importantes como parques, obras de arte, etc. Aun si la oferta fuera la que se acercara a la demanda, esta última solo representa las «necesidades» de consumo en la medida en que nuestros ingresos o endeudamiento nos hagan «capaces» de consumir. Más aún, los precios, en realidad, no son fijados espontáneamente por el equilibrio entre la oferta y la demanda, sino por las propias empresas, de acuerdo con el control que tengan del mercado mediante monopolios, carteles o poder político. Es decir, el mercado estimula, sin lugar a dudas, la producción, pero la distribución de recursos que genera no es ni eficiente ni guiada por necesidades de consumo reales.

Como todos sabemos, la competencia del mercado lleva a las empresas a reducir sus costos, y los primeros afectados son los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, y el medioambiente. Es posible intentar resolver estas fallas del mercado estableciendo regulaciones como control de precios y cuotas de producción, o más sutiles mediante políticas financieras, de impuestos o subsidios. Pero estas medidas, como en el caso de la planificación centralizada, además de que su implementación es muy costosa —sobre todo cuando no hay una cultura de acatamiento a las reglas— no son efectivas porque no cambian la motivación de los administradores de las empresas. Cuando las empresas operan bajo relaciones mercantiles, por su propia definición —relaciones bilaterales entre los que ofertan y los que demandan, donde cada parte busca maximizar su propio beneficio—, lo que motiva a los administradores es aumentar al máximo sus ganancias. No importa quiénes sean (capitalistas, representantes del Estado o incluso trabajadores, en el caso de empresas autogestionadas), la lógica de su motivación los lleva a tratar de evadir cualquier regulación o compromiso social que disminuya sus ganancias. Aun si los administradores fuesen altruistas y decidieran no hacer lo anterior, lo más probable es que el mercado no los premie, sino los castigue con una reducción de sus ventas.

Por tanto, el rechazo al mercado no es ni dogmático ni simplista, sino una posición que refleja un entendimiento objetivo de su funcionamiento. Lo dogmático y simplista, en mi opinión, es no reconocer que tanto el mercado como la planificación no democrática tienen aspectos negativos y positivos. Del primero, podemos tomar su descentralización u horizontalidad, que lo hace más eficiente al permitir que los agentes económicos estén mejor informados; pero neguemos su carácter bilateral, que lo hace ineficiente socialmente y no democrático al excluir de las decisiones a aquellos afectados, que deberían poder defender sus intereses (por ejemplo, comunidades donde se ubican las empresas, o trabajadores en empresas no democráticas). De la planificación no democrática, tomemos la coordinación que la hace más eficiente socialmente al evitar y disminuir desigualdades; pero neguemos su carácter centralizado y verticalista que la hace ineficiente al impedir que los agentes económicos estén mejor informados.

Una planificación democrática no solo puede combinar la eficiencia tradicional del mercado y la eficiencia social de la planificación, sino ofrece una manera más efectiva de asegurar que las empresas cumplan con su responsabilidad social, tanto de producir para satisfacer necesidades reales, como de contribuir con parte de sus ganancias para combatir desigualdades y para proveer servicios públicos a todos. Como vimos, los intentos de regular las empresas bajo el mercado y la planificación no democrática son eventualmente inefectivos porque no se intenta cambiar la motivación de los administradores, de manera que sus intereses correspondan con los de la sociedad. Una

planificación democrática crea las condiciones para que los administradores asimilen el interés social y para garantizar que se les premie por ello, en lugar de castigarlos como hace el mercado. Por tanto, en la medida en que la práctica democrática se consolide, es bien probable que la cantidad de recursos necesarios para coordinar democráticamente sea menor que aquellos necesarios para guiar a las empresas hacia la satisfacción de necesidades sociales reales.

¿Sacrifica la planificación democrática la autonomía que supuestamente tienen las empresas y los consumidores en un sistema de mercado? Si entendemos «autonomía» como independencia para tomar decisiones, y no el derecho a ignorar los derechos de los demás, la planificación democrática aumenta la autonomía de muchos actores que son ignorados por ser «externos» a las transacciones mercantiles. En un sistema de planificación democrática, ni las empresas ni los consumidores tienen planificadores diciéndoles lo que tienen que hacer; las decisiones son tomadas independientemente por ellos, a la luz de los intereses sociales. Además, mientras que en el mercado esa soberanía es sustantivamente afectada por la mayor inseguridad de los actores, en una planificación democrática las empresas y consumidores tienen mayor seguridad y por tanto pueden considerar opciones que serían impensables cuando tienen que preocuparse por mantener o alcanzar una cierta posición de control en el mercado.

¿Es posible usar el mercado para distribuir algunos productos cuyas cantidades no es necesario planificar mientras se crean las condiciones para pasar a la planificación democrática? Un sistema de planificación democrática no tiene por qué planificar las cantidades que deben ser producidas de todos los productos, sino solo de aquellos que se consideren importantes. (Tampoco implica que todas las empresas tengan que ser de trabajo asociado, sino que también puede haber empresas de propiedad privada simple, es decir, autoempleo o empleo familiar). Por otro lado, en la medida en que sea necesario regular la producción de algunos de esos productos para asegurar parámetros de calidad y cuidado del medio ambiente, la planificación democrática, como hemos visto, va a ser más efectiva que el mercado.

El problema fundamental de recurrir al mercado es que al usar mecanismos de motivación basados en el egoísmo, se hace más difícil que después podamos pasar a otros basados en la solidaridad. Las relaciones de intercambio mercantiles les enseñan a los consumidores y administradores de empresas a pensar solo en sus intereses individuales —y colectivos, en el caso de las empresas autogestionadas— estrechos. Con el paso del tiempo se afianza el egoísmo y, como consecuencia, en lugar de establecer regulaciones para disminuir las desigualdades y otros males sociales, se termina haciendo mayores concesiones al interés individual para no desincentivar la producción. Las experiencias en China, Vietnam y Yugoslavia —que además demuestran que las empresas autogestionadas tampoco pueden evadir los efectos del mercado—, han señalado los grandes riesgos que tiene la introducción de las relaciones mercantiles. Si lo que queremos es construir una sociedad verdaderamente socialista, donde lo que motive a las personas a producir sea la solidaridad, no podemos utilizar el egoísmo como palanca. Si la práctica diaria de aquellas promueve sus egoísmos, nunca vamos a lograr que sean solidarias.

Más peligroso aún es que el mercado fortalece el poder económico de los administradores (capitalistas o estatales), que les permite eventualmente hacerse del poder político y guiar la sociedad hacia la satisfacción de sus intereses. La aceptación de capitalistas privados en el Partido Comunista Chino es clara evidencia de ello.

Por otro lado, y volviendo al nivel micro, la manera más efectiva de asegurar que los trabajadores de una empresa estén motivados a cumplir el plan (o compromiso de producción) de su centro de trabajo es que sean ellos mismos quienes lo hayan decidido

y que todos sufran las consecuencias de cumplirlo o no. La planificación democrática asegura que los responsables de la administración de una empresa estén motivados para cumplir el plan, pero solo si aquella es compartida entre todos los trabajadores logramos que ellos compartan esa motivación.

Cuando los trabajadores operan bajo relaciones de trabajo asalariado (característica del capitalismo y del «socialismo de Estado»), es decir, donde los propietarios legales de la empresa (sean capitalistas privados o instituciones estatales) dan el control de la administración a otros que no son los trabajadores, es evidente que sus intereses no coinciden. La productividad de estos últimos tiene que ser motivada por mecanismos como el miedo al despido o los «estímulos materiales», pero en algunas situaciones, el uso del despido es inaceptable para la sociedad, y es imposible o muy costoso implementar un sistema de estímulos materiales.

Cuando los trabajadores operan bajo relaciones de trabajo asociado (característica del socialismo), es decir, donde los propietarios legales de la empresa permiten que aquellos administren colectivamente la empresa, es evidente que los intereses coinciden, pues los administradores son ellos mismos (sea de forma directa o indirecta mediante representantes elegidos democráticamente). El reto es definir un interés colectivo compartido por todos, y asegurar que todos cumplan con él. Lo primero puede lograrse si es decidido democráticamente, y sobre todo si el número de trabajadores no es muy grande y tienen intereses semejantes o fácilmente reconciliables. Para impedir que algunos trabajen por debajo de sus capacidades, las empresas democráticas pueden establecer mecanismos de supervisión colectiva mediante los cuales los propios trabajadores puedan evaluar de cerca el desempeño de cada uno, e imponer sanciones en casos que se considere necesario. Esto es posible hacerlo con efectividad solo cuando cada trabajador entiende que si otro trabaja menos, afecta tanto el interés colectivo como el suyo propio. Además de motivar la productividad, la relación de trabajo asociado es una fuente importante de eficiencia porque los trabajadores están motivados a brindar información necesaria para organizar más eficientemente la producción, que solo se puede obtener cuando ellos son los propios administradores, pues solo ellos la conocen.

En mi opinión, la causa esencial de que nuestros trabajadores no estén motivados para producir con eficiencia y calidad no es que tengan insatisfechas, sus necesidades materiales, sino la manera que está organizada nuestra economía tanto a nivel micro como macro. Por supuesto que es más difícil sacrificarnos por otros cuando nuestras necesidades básicas no están satisfechas; pero la idea no es pedirles a las personas, y menos imponerles, que se sacrifiquen por otras, pues esto, aunque no imposible, no es sostenible ni justo para los que se sacrifican más que otros. La experiencia ha confirmado que las personas desarrollan su solidaridad no solo como resultado de una educación que enfatice esos valores. La educación es importante, pero es fundamentalmente mediante la práctica genuinamente democrática que pasan a ver los intereses de esos otros como propios, es decir, a adaptar sus intereses individuales a intereses más generales.

La participación de los trabajadores en la administración de las empresas no solo contribuiría a su desarrollo pleno, sino también sería una fuente de motivación bien importante. De hecho, reconociendo que para asegurar la calidad de todo servicio o producto que tenga cierto grado de complejidad es importante que los trabajadores estén genuinamente motivados, muchas empresas capitalistas se han reorganizado de manera que ellos tengan más participación en la toma de decisiones y se sientan más dueños y, por tanto, más responsables de su trabajo. Varios estudios empíricos han demostrado que mientras mayor sea el alcance y contenido de la participación, más motivados están

los trabajadores. La motivación es aún mayor cuando la participación se combina con el hecho que el ingreso de los trabajadores esté atado al desempeño de la empresa, el cual sería evaluado de manera más justa mediante una planificación democrática que considere los beneficios y costos sociales que serían ignorados por el mercado. Con esta reflexión no le estoy restando urgencia ni importancia a la necesidad de erradicar las graves deficiencias —tanto cuantitativas como cualitativas— de productos y de servicios que sufrimos los cubanos. Solo he tratado de demostrar que no es necesario recurrir a mecanismos de motivación basados en el egoísmo, como el mercado, para lograrlo. E intento alertar que si recurrimos al mercado, ni vamos a lograr satisfacer las necesidades materiales reales de todos, ni después vamos a poder apelar a la solidaridad necesaria para satisfacer las necesidades de desarrollo pleno de todos; algo que debería ser parte de todo proyecto socialista que valore su contenido humanista. Más aún, corremos el riesgo de encontrarnos en una situación política donde la opción más «racional» (desde la lógica de los administradores) sea abandonar del proyecto socialista.

Tampoco estoy negando que es necesario hacer cambios profundos en la organización de nuestra sociedad para que logremos satisfacer las necesidades de desarrollo pleno de los cubanos. Todo lo contrario. Solo estoy diciendo que ni el mercado ni un renovado sistema de planificación centralizada nos van a permitir lograrlo. Hay mucho todavía que analizar sobre la puesta en práctica de un sistema de planificación democrática, pero creo que es la mejor apuesta para profundizar y no comprometer más nuestro socialismo. Una cosa es el pragmatismo de evitar cometer errores, y otra el derrotismo o miedo al fracaso, que nos impide intentar algo que no ha sido implementado a gran escala y por largo tiempo. ¡No tengamos miedo a las capacidades de administración y de ser solidarios que tenemos los cubanos!

19 de octubre de 2007